



GD-F-008 V.9

Página 1 de 7

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010004365 DEL 07/03/2017

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el párrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, en la Resolución No. SSPD 20111300032265 de 2011, la Ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el Párrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual “se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, estableció que “La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el párrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007”.

Que el Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20111300032265 del 21 de octubre de 2011, delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el párrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con el Decreto 1077 de 2015; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el Municipio de MIRAFLORES del Departamento de BOYACÁ, es de categoría 6 y no fue prestador directo de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2015.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015, estableció los requisitos que debían acreditar y cumplir los municipios y distritos para obtener la certificación en mención respecto de la vigencia de 2015.

Que mediante Resolución No. SSPD 20164010053785 del 30 de septiembre de 2016, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al Municipio de MIRAFLORES del Departamento de BOYACÁ, por no haber cumplido el siguiente requisito previsto en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015:

“Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemento o sustituya.”

La Resolución No. SSPD 20164010053785 se notificó de forma personal en fecha 22 de noviembre de 2016, tal y como se observa en el expediente.



Que el Municipio de MIRAFLORES – BOYACÁ mediante el documento radicado bajo el número SSPD 20165290833672, interpuso oportunamente recurso de reposición contra la resolución de descertificación.

2. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO Y PRUEBAS APORTADAS CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN

2.1 Argumentos del recurrente

En el recurso interpuesto por apoderado doctor JOSE ALEXANDER BOHORQUEZ RODRIGUEZ según poder especial otorgado por el Alcalde Municipal WILLINTON JAIME ALFONSO PRIETO aduce:

Primero hace un recuento de los procesos de certificación desde el año 2014, indicando que no había sido descertificado por el Acuerdo, teniéndose que para una de las mencionadas vigencias aportó el mismo acuerdo.

Asimismo señala que la resolución debe ser objeto de revisión, por cuanto hay argumentos de fondo y documentales que permiten establecer que en el Municipio de Miraflores no existen los estratos 5 y 6 para la aplicación de las tarifas de los servicios públicos situación que ya era de conocimiento de la Superintendencia a través del acuerdo número 33 del 6 de diciembre de 2011, documento aprobado para la vigencia 2014 y que es la norma municipal para la aplicación del régimen tarifario en el municipio.

Concluye el recurrente que al emitir la resolución que los descertificó se emite una resolución “*el casuales*” (sic) inexistentes e inadecuadas, al establecer un acto con causal de indebida motivación pues la entidad es conocedora de los estratos socioeconómicos que existen en el municipio aprobándolos en vigencias anteriores y no puede basarse en una actuación posterior como es el cargue de información, que evidencia una situación ya conocida por la Superintendencia, lo cual genera que el acto administrativo se tome en una de sus motivaciones en especial en no dar la certificación.

Así indica que el establecer causales inexistentes y sin los argumentos jurídicos económicos y técnicos constituye una apreciación de actos nulos.

De la misma forma invoca el principio de la buena fe, indicando que en vigencias anteriores otorgó la certificación apelando al buen juicio a la buena fe. Aduciendo que la buena fe tiene dos manifestaciones concretas el respeto por el acto propio y la confianza legítima, que, conjuntamente previenen a los operadores jurídicos de contravenir o ir en contra de sus actuaciones precedentes y de defraudar las expectativas que generan en los demás a la vez que compelen a las autoridades y a los particulares a conservar una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los compromisos adquiridos y una garantía de estabilidad y durabilidad de las situaciones que objetivamente permitan esperar el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico.

Por su parte en tanto las actuaciones realizadas anteriormente por la administración del municipio de Miraflores, está recae en la confianza depositada en la Superintendencia, la cual para vigencias anteriores ha aprobado el acuerdo municipal sobre la estructura del sistema tarifario en el municipio, sin hacer observación alguna, lo que ha implicado un actuar de la administración de Miraflores, ajustado al marco normativo y que ha sido de cumplimiento, por lo que a buen juicio constituye en esta instancia aplicación de la confianza legítima.

Señala que el principio de la confianza legítima exige cierta estabilidad o convicción frente a las decisiones de la administración por cuanto el ciudadano tiene derecho a actuar en el marco de reglas estables y previsibles. No obstante eso no implica la inmutabilidad o intangibilidad de las relaciones jurídicas entre los particulares y la administración, pues de todos modos la administración puede justificadamente cambiar las decisiones o reglamentos que adopta cuando por ejemplo se advierte que la actuación de particular es contraria al ordenamiento jurídico.

Trae a colación lo que ha señalado el Consejo de estado concluyendo que en consideración del principio de confianza legítima, las autoridades deben ser coherentes en sus actuaciones, respetar los compromisos adquiridos y garantizar la estabilidad y durabilidad de las situaciones generadas o reconocidas, sin que eso limite las facultades que tiene la administración para modificar justificadamente sus decisiones, por lo que en virtud a lo anteriormente señalado, debe corresponder a la entidad certificar al municipio de Miraflores, como quiera que la situación o estado de certificación, ya fue objeto de revisión y aprobación previamente por la entidad, determinando para vigencias anteriores el cumplimiento de este requisito ajustado a lo establecido en la ley y los reglamentos.

Por lo cual solicita se revoque la resolución que resolvió DESCERTIFICAR al municipio para la vigencia año 2015.

2.2 De los documentos aportados con el recurso de reposición.

Con el documento radicado con el No. 20165290833672, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición no se allegó documento alguno.

3 ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS

- **En cuanto al acuerdo mediante el cual se establecen los porcentajes de subsidios y aportes solidarios para la vigencia 2015:**

Con el fin de analizar los argumentos expuestos por el ente territorial, es procedente recordar que el municipio fue descertificado mediante la Resolución No. 20164010053785 del 30 de septiembre de 2016, por incumplir el requisito de reportar al SUI el acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia 2015, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complementa o sustituya.

Lo anterior, toda vez que no incluyó los porcentajes de aporte solidario para los estratos 5 y 6 pese a que reportó predios de dichos estratos en el formato de estratificación y coberturas para la vigencia 2015 y tampoco fijó el porcentaje de contribución en cuanto al uso comercial del servicio de aseo.

Ahora bien, para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta SSPD procederá a analizar los argumentos expuestos, por ejes temáticos de la siguiente manera:

-Señala que la resolución debe ser objeto de revisión por cuanto hay argumentos de fondo y documentales que permiten establecer que en el Municipio de Miraflores no existen los estratos 5 y 6 para la aplicación de las tarifas de los servicios públicos situación que ya era de conocimiento de la Superintendencia a través del acuerdo número 33 del 6 de diciembre de 2011, documento aprobado para la vigencia 2014 y que es la norma municipal para la aplicación del régimen tarifario en el municipio.

Concluye el recurrente que al emitir la resolución que los descertificó se emite una resolución "el casuales" (sic) inexistentes e inadecuadas, al establecer un acto con causal de indebida motivación pues la entidad es conocedora de los estratos socioeconómicos que existen en el municipio aprobándolos en vigencias anteriores y no puede basarse en una actuación posterior como es el cargue de información, que evidencia una situación ya conocida por la Superintendencia, lo cual genera que el acto administrativo se torne en una de sus motivaciones en especial en no dar la certificación.

Así indica que el establecer causales inexistentes y sin los argumentos jurídicos económicos y técnicos constituye una apreciación de actos nulos.

En primer lugar el Despacho debe señalar frente al argumento que para la vigencia 2014 aportó el mismo acuerdo y no fue descertificado que se trata de procesos diferentes ya que se analizan vigencias diferentes en uno fue la del año 2014 y en la de ahora es la del año 2015.

Ahora no es capricho de la Superintendencia cuando analiza el Acuerdo y establece para la vigencia 2015 que es la que es objeto de estudio, que el Acuerdo 33 del 6 de diciembre de 2011, no fijó el porcentaje de contribución para los estratos 5 y 6 y el comercial para aseo. Pues lo mismo se corroboró en el mencionado Acuerdo.

Requisito que al no estar acorde, incumple lo establecido en el artículo 2.3.4.2.2. **Decreto 1077 de 2015** y el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, que establece que recibida por parte del alcalde municipal o distrital la solicitud o solicitudes de que trata el numeral anterior, procederá a analizarlas y a preparar un proyecto consolidado sobre el particular para ser presentado a discusión y aprobación del concejo municipal o distrital, quien, conjuntamente con la aprobación del presupuesto del respectivo ente territorial definirá el porcentaje de aporte solidario necesario para solventar dicho faltante, teniendo en consideración prioritariamente los recursos con los que cuenta y puede contar el municipio o distrito en el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, con base en las fuentes de recursos para contribuciones señaladas normatividad única para el sector de Hacienda y Crédito Público y demás normas concordantes. Asimismo la normatividad establece a quienes se le debe subsidiar y quienes deben aportar, señalando los porcentajes máximos y mínimos que pueden establecer.

En consecuencia con lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 89.1 en concordancia con lo establecido en el artículo 2 de la ley 632 de 2000 y artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, los factores de aporte solidario para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a que hace referencia el artículo 2 de la Ley 632 de 2000 serán como mínimo los siguientes: Suscriptores Residenciales de estrato 5: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Residenciales de estrato 6: sesenta

por ciento (60%); Suscriptores Comerciales: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Industriales: treinta por ciento (30%).

Así las cosas no hay duda que es la ley la que exige que el mencionado Acuerdo, debe tener establecidos los factores de aportes solidarios para los estratos 5 y 6 comercial e industrial. Y no se puede excusar que con el mismo Acuerdo esta entidad no hizo la observación correspondiente.

Ahora para el caso específico, no es cierto que el municipio no hubiera reportado dentro del REC que dentro de su estratificación tiene los estratos 5 y 6 pues verificada la información, sí tiene esos estratos, ahora guarda silencio frente al comercial en aseo, en el cual se establece dentro de la misma información que si tiene suscriptores comerciales.

En consecuencia se corrobora lo dispuesto en la resolución de descertificación, y no prospera el argumento por cuanto es la misma ley como se estableció la que exige que se deben establecer los factores de aporte solidario para los estratos 5 y 6 y el comercial de aseo, dentro del Acuerdo que rige para la vigencia 2015, máxime que el municipio cuenta dentro de su territorio con los mencionados estratos, según información suministrada por el mismo municipio.

Además que tampoco allega información o prueba con ocasión del recurso que demuestre que el municipio no tiene suscriptores de estratos 5 y 6, o comercial. Por lo cual se debe indicar que de conformidad con lo establecido en el artículo 167 del Código General del proceso le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, en consecuencia el argumento no prospera.

Ahora tampoco se puede indicar que exista un indebida motivación o que el acto es nulo, por cuanto el acto administrativo que decidió descertificar al municipio de Miraflores, verificó los requisitos, establecidos artículo 2.3.5.1.2.1.10 del Decreto 1077 de 2015, que establece que el proceso de certificación corresponde a una **actuación administrativa** atinente a la verificación que debe hacer la Superintendencia de Servicios Públicos del cumplimiento por parte de los municipios a los requisitos establecidos en los artículos 2.3.5.1.2.1.6 (municipio no prestador directo) y 2.3.5.1.2.1.7 (municipio prestador directo) del Decreto 1077 de 2015, según lo dispone el artículo 2.3.5.1.2.1.5 *ibidem*, con el fin de establecer si dichos entes territoriales administrarán o no los recursos del SGP – APSB para cada vigencia.

En este orden de ideas, es claro que el ente territorial tiene la obligación de cumplir unos requisitos taxativamente establecidos en las normas señaladas dentro de un término establecido. Para el caso concreto, vigencia 2015, el MUNICIPIO DE MIRAFLORES – BOYACÁ debió acreditar, por expreso mandato normativo, los requisitos señalados en el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015. Que según lo establecido en el artículo 2.3.5.1.2.1.9 *ibidem* y la Resolución No.0275 del 29 de abril de 2016 señalaron que los municipios y distritos tenían hasta el 15 de abril de 2016 para reportar la información FUT, y hasta el 20 de mayo de 2016 para acreditar el cumplimiento de los requisitos en el SUI.

Teniéndose que tal y como lo dejó sentado el acto administrativo el municipio cumplió con los requisitos menos con el de al acuerdo mediante el cual se establecen los porcentajes de subsidios y aportes solidarios para la vigencia 2015, ya que el acto administrativo no señala los estratos 5 y 6, además no fija el porcentaje de contribución en cuanto al uso comercial del servicio de aseo, pese a que en el reporte REC el municipio reporta el estrato 5 y 6 y usuarios comerciales e industriales, por lo cual no cumplió.

Entonces no hay duda que el acto administrativo estuvo motivado y por tanto no se da causal alguna de nulidad máxime que el recurrente no señala qué causal se da y tampoco se establece dentro de la actuación o el acto administrativo, que se hubiere configurado alguna.

Además para poder hablar de falsa motivación, como la misma jurisprudencia indica es porque la Administración omitió hechos como motivos determinantes que no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa o que la Administración omitió tener en cuenta hecho que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente, circunstancias que no se dieron en el presente caso, por cuanto los documentos allegados por el municipio dieron cuenta que no cumplían con la norma y además el mismo ente territorial era el que había señalado que en el municipio cuenta con los estratos 5 y 6 y con el comercial.

Y tampoco como se indicó se probó con el recurso la inexistencia de los estratos 5 y 6 y el comercial.

En consecuencia el argumento del recurrente no prospera.

Segundo Argumento:

De la misma forma invoca el principio de la buena fe, indicando que en vigencias anteriores otorgó la certificación apelando al buen juicio a la buena fe. Aduciendo que la buena fe tiene dos manifestaciones concretas el respeto por el acto propio y la confianza legítima, que, conjuntamente previenen a los operadores jurídicos de contravenir o ir en contra de sus actuaciones precedentes y de defraudar las expectativas que generan en los demás a la vez que compelen a las autoridades y a los particulares a conservar una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los compromisos adquiridos y una garantía de estabilidad y durabilidad de las situaciones que objetivamente permitan esperar el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico.

Por su parte en tanto las actuaciones realizadas anteriormente por la administración del municipio de Miraflores, está recae en la confianza depositada en la Superintendencia, la cual para vigencias anteriores ha aprobado el acuerdo municipal sobre la estructura del sistema tarifario en el municipio, sin hacer observación alguna, lo que ha implicado un actuar de la administración de Miraflores, ajustado al marco normativo y que ha sido de cumplimiento, por lo que a buen juicio constituye en esta instancia aplicación de la confianza legítima.

Señala que el principio de la confianza legítima exige cierta estabilidad o convicción frente a las decisiones de la administración por cuanto el ciudadano tiene derecho a actuar en el marco de reglas estables y previsibles. No obstante eso no implica la inmutabilidad o intangibilidad de las relaciones jurídicas entre los particulares y la administración, pues de todos modos la administración puede justificadamente cambiar las decisiones o reglamentos que adopta cuando por ejemplo se advierte que la actuación de particular es contraria al ordenamiento jurídico.

Trae a colación lo que ha señalado el Consejo de Estado concluyendo que en consideración del principio de confianza legítima, las autoridades deben ser coherentes en sus actuaciones, respetar los compromisos adquiridos y garantizar la estabilidad y durabilidad de las situaciones generadas o reconocidas, sin que eso limite las facultades que tiene la administración para modificar justificadamente sus decisiones, por lo que en virtud a lo anteriormente señalado, debe corresponder a la entidad certificar al municipio de Miraflores, como quiera que la situación o estado de certificación, ya fue objeto de revisión y aprobación previamente por la entidad, determinando para vigencias anteriores el cumplimiento de este requisito ajustado a lo establecido en la ley y los reglamentos.

Por lo cual solicita se revoque la resolución que resolvió DESCERTIFICAR al municipio para la vigencia año 2015.

Para abordar el estudio del presente argumento, es pertinente recordar lo desarrollado por la Corte Constitucional¹ frente al principio de la buena fe, así:

(...)

El artículo 83 de la Carta Política establece que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse al principio de la buena fe, el cual, según la jurisprudencia constitucional, se entiende como un imperativo de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que acompaña a la palabra comprometida, se presume en todas las actuaciones y se erige en pilar fundamental del sistema jurídico.

Sobre el principio de buena fe, esta Corporación ha destacado lo siguiente:

“La buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico.”

La Corte ha establecido que el espectro de aplicación del principio de buena fe no se limita al nacimiento de las relaciones jurídicas sino que se extiende al desarrollo de las mismas, hasta su extinción, de suerte que los operadores jurídicos en el curso de tales relaciones deben adecuar su comportamiento a parámetros significativos de lealtad y honestidad y tienen que responder a las expectativas que sus actuaciones precedentes han generado en los demás.” (Subrayas del Despacho)

Con base en lo mencionado previamente, se debe evocar que la Constitución Política de 1991 señala en el artículo 83, que *“las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe y presumirse en todas las gestiones que adelanten aquellos ante éstas.”*

¹ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 248 del 6 de marzo de 2008. M.P.: Dr. Rodrigo Escobar Gil.

Este postulado constitucional que introdujo la carta de 1991, exige de los particulares y de las autoridades públicas ceñirse en sus actuaciones a una conducta honesta, leal y acorde con el comportamiento que puede esperarse de una persona correcta.

Tal conducta se asimila a lo establecido en el principio general de derecho de la buena fe que se erigió en el texto constitucional en dos sentidos: de una parte, la consagración del deber de actuar de buena fe tanto de los particulares como de los servidores públicos; y de otra parte, la presunción de la misma en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas.

En este mismo sentido, como ya se evidenció, la jurisprudencia ha sostenido que la buena fe supone la existencia de una relación entre personas, y fundamentalmente, de la confianza, seguridad y credibilidad que se otorga a la palabra dada, además de presidir las actuaciones de las autoridades en todas las gestiones que los particulares adelanten ante éstas.

En efecto, el principio vertebral de la convivencia social, como de cualquier sistema jurídico en general, lo constituye la buena fe, tal y como lo manifiesta el recurrente, con sujeción a la cual deben actuar las personas –sin distinción alguno– en el ámbito de las relaciones jurídicas e interpersonales en las que participan, bien a través del cumplimiento de deberes de índole positiva que se traducen en una determinada actuación, bien mediante la observancia de una conducta de carácter negativo (típica abstención), entre otras formas de manifestación.

Así las cosas, el postulado de la buena fe en el ordenamiento constitucional protege y concede a cada cual el derecho de exigir que los demás crean en su palabra, además, dicho postulado tiene enorme trascendencia en la confianza que debe acompañar a todas las actuaciones y ésta es indispensable para la seguridad del tráfico jurídico y la eficacia de la gestión estatal.

Del mismo modo, este Despacho considera que en efecto, tal y como lo expresa el recurrente, en los términos empleados por la Corte Constitucional en la sentencia C-840 de 2001, el principio de buena fe, de acuerdo a lo establecido por el Constituyente, se presume en las actuaciones de los particulares, lo que no ocurre con las actuaciones de los servidores públicos, sin que ello conlleve a la presunción de la mala fe en el actuar de éstos, sino que sus actuaciones se rigen por los principios de constitucionalidad, y legalidad que informan la ley y nutren la producción de los actos administrativos.

También se expone que la buena fe se refiere exclusivamente a las relaciones de la vida social con transcendencia jurídica, que sirve para valorar el comportamiento de los sujetos de derecho, al tiempo que funge como criterio de reciprocidad cuando se toma como una regla de conducta que debe ser observada por los sujetos en sus relaciones jurídicas, en el ámbito de sus derechos y deberes, criterios que han sido esbozados de forma reiterado por esa Corporación judicial.

Respecto al argumento que se debe aplicar el principio de la confianza legítima y principio de la buena fe al respecto es menester señalar que mediante este acto administrativo se está evaluando al ente territorial respecto de la vigencia 2015, en este orden de ideas, no se atiene a los resultados de procesos anteriores, toda vez que son independientes, es por eso que dentro del proceso de certificación que nos ocupa, se realizó nuevamente el análisis de cada requisito a la luz de las normas que regulan la materia, encontrando que para la vigencia de 2015 que es la que se está revisando, el Acuerdo bajo estudio no cumple.

Teniendo en cuenta lo anterior, de acuerdo a las actuaciones del municipio en torno a la ley, no se presentó un cambio sorpresivo, abrupto e inesperado en la normatividad que regula los porcentajes de subsidios y contribuciones, que no fuese previsible para que la administración municipal tomara las medidas convenientes y oportunas que concordaran con lo fijado en la ley.

Finalmente se advierte, que el proceso de certificación reviste una función administrativa y no sancionatoria; es decir, el presente proceso no tiene como fin establecer o determinar responsabilidades por la violación al régimen de servicios públicos domiciliarios e imponer una consecuente sanción, sino que esta Superintendencia se limita a evaluar la información que el municipio reporta para acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados en el Decreto 1077 de 2015, lo que a la postre deriva en la certificación o descertificación.

En este orden de ideas, el incumplimiento para la vigencia 2015 se consolidó, sin que el ente territorial haya podido desvirtuarlo y en consecuencia el Despacho debe aplicar las consecuencias establecidas en el Decreto 1077 de 2015 para dicho incumplimiento, tal y como se dispuso en el acto impugnado.

Al concluir que el municipio no cumplió con los requisitos establecidos en la ley, los recursos del SGP –APSB destinados inicialmente al municipio descertificado, se transfieren al departamento respectivo para que este los administre. Vale aclarar que a pesar de que los recursos pasan a ser administrados por el ente departamental, este no puede variar la destinación inicial de los mismos, ya que es el encargado de realizar todas las gestiones necesarias para garantizar la prestación eficiente de los servicios esenciales de agua potable y saneamiento básico en todo el municipio.

Conforme a lo anterior no se accede a la solicitud de proceder a revocar el acto impugnado por las razones ya expuestas.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20164010053785, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente resolución al alcalde del Municipio de MIRAFLORES del Departamento de BOYACÁ, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR, una vez en firme, el contenido de la presente resolución al Gobernador del Departamento de BOYACÁ al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y publicar en la página web de la SSPD.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.


JULIÁN DANIEL LÓPEZ MURCIA

Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Olga Rocio Yanquen Caro --Abogada Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Revisó: María Eugenia Sierra Botero--Coordinadora Grupo de Certificaciones e Información
Expediente: 2016401351600849E